

Santiago, dieciocho de abril de dos mil veintidós.

**Vistos:**

En estos autos RIT O-228-2019 RUC 1940210369-0, del Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó, por sentencia de quince de enero de dos mil veinte, se acogió, parcialmente, la demanda declarativa de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones, deducida por doña Stephanie Andrea Guevara Escobar en contra del Instituto Nacional del Deporte, y rechazó las acciones de nulidad del despido y cobro de las cotizaciones de seguridad social devengadas durante su vigencia.

La demandante interpuso recurso de nulidad que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Copiapó, mediante sentencia de treinta de marzo de dos mil veinte.

En contra de este fallo, la misma parte dedujo recurso de unificación de jurisprudencia.

Se ordenó traer los autos en relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de los tribunales superiores de justicia. La presentación debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de los fallos que se invocan como criterios de referencia.

**Segundo:** Que las materias de derecho propuestas consisten en determinar *“la procedencia del pago de cotizaciones de seguridad social y la nulidad del despido cuando en la sentencia definitiva se declare la relación laboral”*.

Para la recurrente, la correcta decisión conforme a la cual se debe dirimir la controversia, se contiene en las sentencias que acompaña a modo de contraste, en las que se analizó el alcance y contenido de los artículos 41 y 58 del código del ramo, y, 17 y 19 del Decreto Ley N°3.500, disposiciones de las que concluye que las cotizaciones de seguridad social, configuran un gravamen que el empleador descuenta de las remuneraciones del trabajador, para enterarlas, a continuación, en las respectivas instituciones previsionales, obligación que se extiende desde el inicio de la vinculación y que en este caso fue incumplida por el recurrido, a la que



igualmente se encontraba sujeto, no obstante tratarse de un organismo público, de conformidad, además, con el carácter declarativo del fallo, que reconoció la naturaleza laboral de la relación contractual, motivos suficientes que, en su concepto, bastan para condenar al recurrido al pago de tales prestaciones y de las que se originen con motivo de la nulidad del despido hasta su convalidación, por concurrir los requisitos que exige el artículo 162 del Código del Trabajo; razones por las que solicita la invalidación del fallo recurrido y se dicte el de reemplazo que indica.

**Tercero:** Que para la acertada resolución de las materias de derecho propuestas, se debe considerar que la sentencia de base sostuvo, *“en lo que atañe a la acción de nulidad del despido, que pese a la información que desprenden las comunicaciones de AFP, FONASA y AFC respecto de las cuentas de la actora en esas entidades previsionales, salud y seguridad social, no obstante y en razón de lo que se ha venido analizando y concluyendo a partir del motivo décimo primero en adelante y atendido que es recién en esta sentencia donde quedará establecida la efectiva existencia de una relación laboral que vinculó a las partes, ello hace patente que a la época para la demandada fue imposible cumplir con la obligación de retener las cotizaciones para tales instituciones desde los dineros pagados como contraprestación a la actora, con ello se desprende que esa demandada no pudo al final de la vinculación incurrir en la figura del artículo 162 en sus incisos 5°, 6° y con ello no puede ser sancionado de la manera que indica el inciso 7° de la misma norma, conocida como ‘Ley Bustos’ la que estaba prevista para otra finalidad, esto es, para contrataciones entre privados en los que durante el iter contractual existió de modo irrefutable la obligación del empleador de retener de las remuneraciones de su dependiente los montos de las cotizaciones y de enterar éstas dentro de los plazos legales correspondientes a las respectivas instituciones, siendo el efecto legal de la nulidad del despido, uno de carácter sancionatorio solo cabe su interpretación y aplicación de manera restringida, por lo que en la especie estimando que la demandada no estuvo en la condición descrita por la norma no es posible aplicar tal sanción es por ello que esta Juzgadora negará lugar a esta parte de la demanda en lo resolutive de esta decisión”*.

La Corte de Apelaciones, resolviendo el recurso de nulidad deducido por la demandante, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción a su artículo 58 y a los artículos 17 y 19 del Decreto Ley N°3.500,



precisa que la denuncia que se formula es “por falsa aplicación, al dejar de reconocerse y pagar a su representada la deuda existente relativa a las cotizaciones de seguridad social inherente a la relación laboral que hubo entre ambos; y, por último, denuncia la errónea interpretación dada al artículo 162 incisos 5°, 6° y 7° del Código del Trabajo, al concluirse que la demandada no pudo al final de la vinculación incurrir en la figura descrita en dicha normativa para ser sancionada con la nulidad del despido, por no haberse constatado de modo irrefutable el iter contractual y consecuente obligación del empleador de retener de las remuneraciones de un dependiente los montos de las cotizaciones y su entero correspondiente en las respectivas instituciones, atendido que es recién en la sentencia donde quedará establecido (o no) la efectiva existencia de la relación laboral vinculante para las partes”; señalando, a continuación, “que concordando con los razonamientos expuestos por la jueza del grado, fuerza reconocer que en el caso de que se trata el Tribunal dio correcta aplicación a la normativa cuya infracción se denuncia, al acoger la demanda declarativa de relación laboral sólo por el tiempo ininterrumpidamente establecido en la causa, esto es, desde el 1 de febrero de 2017 al 31 de mayo de 2019, desestimando igual pretensión por el tiempo que le antecedió, a partir del 15 de mayo de 2008, y para el caso de aceptarse que la situación observada pudiera admitir más de una interpretación, en la inteligencia que ha sido dada a tales preceptos, aun así, la labor de la Jueza redundó en escoger frente a un escenario de diversas opciones interpretativas, la vía hermenéutica más adecuada, en parecer que esta Corte, como se dijo, no puede dejar de compartir. En suma, no siendo del caso advertir el yerro que se denuncia, y encuadrándose el fallo ajustado a la normativa legal, el recurso de nulidad asentado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, no está en condiciones de prosperar, por lo que será rechazado”.

**Cuarto:** Que para evidenciar el requisito de disparidad jurisprudencial, la recurrente presentó tres sentencias pronunciadas por esta Corte en los autos Rol N°45.842-2016, 100.836-2016 y 381-2017, de 7 de diciembre de 2016, 11 de mayo y 14 de junio 2017, respectivamente, y por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en los autos Rol N°467-2018, de 10 de octubre de 2018.

En términos generales, se advierte que los razonamientos que se desarrollan en estos fallos presentan similitudes, puesto que abordan las materias de derecho propuestas por la demandante, aunque se diferencian en un aspecto tangencial, por cuanto las demandas se presentaron en contra de las



Municipalidades de Maipú, Doñihue, y Melipilla, y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en las que se expuso, fundamentalmente, que el Código del ramo contiene una serie de normas destinadas a proteger las remuneraciones de los trabajadores, tal como se desprende de su artículo 58, que obliga al empleador a deducir de aquellas las tasas e impuestos que las graven y las cotizaciones de seguridad social, mandato que se reitera en los artículos 17 y 19 del Decreto Ley N°3.500, concluyendo, de su análisis conjunto, que su descuento y pago, configura una carga que pesa sobre tales estipendios y que es de cumplimiento patronal, la de enterarlas, íntegramente, ante el órgano previsional, junto al aporte del seguro de cesantía, dentro del plazo fijado por la ley; agregándose, a continuación, que el carácter de la convención y de las prestaciones que inicialmente se calificaron como honorarios, resulta indiferente frente a la naturaleza declarativa del fallo que reconoció su sujeción a las disposiciones del Código del Trabajo, excluyendo, por tanto, las estatutarias, por lo que el empleador, aun tratándose de un órgano de la Administración, se encontraba obligado, igualmente, a efectuar las deducciones descritas y a consignarlas en las respectivas administradoras, extendiéndose esta carga desde el inicio del vínculo contractual, y considerando que las municipalidades y el servicio demandado no cumplieron esta exigencia, se declaró que debían responder solventando tales prestaciones y las derivadas de la nulidad del despido, hasta su convalidación, según lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo, por cuanto las obligaciones descritas comenzaron a devengarse desde el momento en que las partes iniciaron su relación contractual, sin importar la denominación dada a la retribución percibida por el dependiente, porque las razones determinantes para dar lugar a las demandas, fue la constatación judicial de su carácter laboral, la improcedencia del despido y, por último, que las entidades demandadas no pagaron a tiempo las mencionadas prestaciones de seguridad social.

**Quinto:** Que, habiéndose confrontado las decisiones, se advierte que concurre el supuesto de disparidad jurisprudencial relacionado con las materias de derecho propuestas por la demandante, por lo que se debe decidir cuál de las divergentes prevalecerá.

**Sexto:** Que, en cuanto al pago de las cotizaciones previsionales devengadas durante el tiempo en que las partes permanecieron vinculadas, esta Corte posee un criterio ya asentado sobre la materia, tal como ha sido expresado en sentencias previas, v. gr., en las pronunciadas en los autos Rol N°14.137-2019,



18.540-19, 19.116-19, 33.307-19, 1.468-20, 1.471-20, 2.779-20, 19.127-20, 19.648-20, 22.048-20, 29.732-19, 2.779-20, 7.898-20, 36.960-20 y 36.973-20; en las que se consideró para resolver lo dispuesto en los artículos 58 del Código del Trabajo y 17 y 19 del Decreto Ley N°3.500, de cuyo tenor, se desprende que las cotizaciones y de seguridad social, constituyen un gravamen obligatorio que afecta a las remuneraciones que perciben los trabajadores, que el empleador debe descontar y enterar en las respectivas administradoras de fondos dentro del plazo fijado en la ley.

Por otro lado, la naturaleza imponible de los haberes es determinada por el legislador, de modo que es una obligación inexcusable del empleador, realizar los descuentos pertinentes y efectuar su posterior e íntegro entero en los organismos previsionales respectivos desde que se comenzaron a pagar las remuneraciones, postura reafirmada por el artículo 3 inciso segundo de la Ley N°17.322, que establece: *“Se presumirá de derecho que se han efectuado los descuentos a que se refiere ese mismo artículo, por el solo hecho de haberse pagado total o parcialmente las respectivas remuneraciones a los trabajadores. Si se hubiere omitido practicar dichos descuentos, será de cargo del empleador el pago de las sumas que por tal concepto se adeuden”*.

De acuerdo con esta presunción, no resulta relevante distinguir si la existencia de la relación laboral formó parte de lo discutido en el juicio y, por consiguiente, si fue declarada en la decisión que se impugna, considerando especialmente el carácter declarativo que tiene la sentencia, que esta Corte ha reconocido en forma invariable como se advierte en las sentencias dictadas en los antecedentes Rol N°6.604-2014, 8.318-2014, 26.067-2014, 5.699-2015, 9.690-2015, 40.560-2015, 28.556-2016, 76.274-2016, 76.444-2016, 3.618-2017, 18.186-2017, 35.737-17, 6.247-2019 y 123-2021, entre otras, en las que se expresó que el pronunciamiento judicial sólo constata una situación preexistente, de manera que la obligación previsional se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones al trabajador, sea que se les diera esa u otra denominación.

**Séptimo:** Que, por lo razonado, y habiéndose determinado la interpretación acertada respecto de la referida materia de derecho, el recurso de unificación de jurisprudencia, en el aspecto analizado, será acogido.

**Octavo:** Que, en relación a la segunda materia de derecho, si bien se constata la existencia de pronunciamientos divergentes, esta Corte considera que



no procede unificar jurisprudencia, puesto que, *prima facie*, la nulidad del despido se impone sólo en caso de comprobarse que no fueron pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación, conclusión que varía cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado –entendida en los términos del artículo 1 de la Ley N°18.575–, por cuanto, en tales casos, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de esta sanción, desde que fueron suscritos al amparo de un estatuto determinado que les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran en la hipótesis prevista para imponerla, excluyendo la idea de simulación o fraude del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios la existencia de una relación laboral, conducta que justifica la imposición de este gravamen.

Por otro lado, la aplicación –en estos casos– de la sanción referida, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las compensaciones propias del despido, por lo que no procede cuando la relación laboral se establece con la Administración del Estado.

**Noveno:** Que las razones descritas, permiten desestimar la segunda pretensión de la demandante, ya que la decisión impugnada, que no dio lugar a la nulidad del despido, coincide con la que esta Corte considera correcta, tal como fue resuelto, v. gr., en los autos Rol N°40.253-2017, 44.902-2017, 22.881-2018, 25.069-2018, 26.509-2018, 28.229-2018, 1.451-2019, 3.679-2019, 10.621-2019, 41.151-2019, 9.941-2020, 21.083-2020, 30.188-2020 y 33.143-2020.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se acoge, parcialmente**, el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la demandante en contra de la sentencia de treinta de marzo de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de Copiapó, que **se invalida**, declarándose, en su lugar, que la sentencia pronunciada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esa ciudad, de quince de enero de dos mil veinte, es parcialmente nula, por cuanto incurrió en una errada interpretación de los artículos 58 del citado código y 17 y 19 del Decreto Ley N°3.500, declarándose, por tanto, que el dictamen de base **es nulo sólo en cuanto desestimó la demanda de cobro de las cotizaciones de**



**seguridad social devengadas durante el período que estuvo vigente la relación laboral**, debiendo dictarse acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, la respectiva de reemplazo.

**Se previene** que la ministra señora Chevesich fue de opinión de acoger íntegramente el arbitrio, dictar sentencia de reemplazo y dar lugar al recurso de nulidad interpuesto por la demandante, y, consecuencialmente, condenar a la demandada a pagar las prestaciones que correspondan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 incisos quinto y séptimo del Código del Trabajo, por las siguientes razones:

**1º** Que el núcleo de la discusión en el aspecto señalado, gira en torno a la procedencia de la sanción prevista en el artículo 162, inciso quinto, del Código del Trabajo, en el caso que la relación laboral existente entre las partes se declare sólo en el fallo del grado.

**2º** Que, al respecto, se debe recordar que, de acuerdo a la modificación introducida por la Ley N°19.631, se impuso al empleador la obligación, en el caso que proceda a despedir a un trabajador, de mantener íntegramente pagadas sus cotizaciones previsionales, de lo contrario, dicho despido carece de efectos –es nulo–, correspondiendo entonces que el empleador, no obstante la separación del trabajador, siga pagando las remuneraciones y capítulos pertinentes hasta que se subsane el incumplimiento referido, convalidando el despido.

**3º** Que, entonces, atendida la naturaleza declarativa de la sentencia que reconoce la existencia de un vínculo de trabajo, no depende de si el empleador retuvo o no lo correspondiente a las cotizaciones de seguridad social, ni de la naturaleza jurídica del empleador, por lo tanto, para quien disiente, procedía declarar que el demandado también debía pagar los emolumentos devengados desde la separación del trabajador hasta la convalidación del despido, si se comprueba la deuda previsional.

Regístrese.

N°44.041-2020.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H. y Ministro Suplente señor Roberto Contreras O. No firma el ministro suplente señor Contreras, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, dieciocho de abril de dos mil veintidós.



RICARDO LUIS HERNÁN BLANCO  
HERRERA  
MINISTRO  
Fecha: 18/04/2022 15:49:13

GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ  
MINISTRA  
Fecha: 18/04/2022 15:49:14

ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ  
SANCHEZ  
MINISTRA  
Fecha: 18/04/2022 15:49:14

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE  
MINISTRA  
Fecha: 18/04/2022 15:49:15





En Santiago, a dieciocho de abril de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, dieciocho de abril de dos mil veintidós.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483-C del Código del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia de la instancia y de la de unificación que antecede, su fundamento sexto.

**Y se tiene, además, presente:**

**Primero:** Que habiéndose constatado o declarado la existencia de la relación laboral y encontrándose establecido que el empleador adeuda las cotizaciones previsionales y de seguridad social de la demandante, corresponde condenarlo al entero de las devengadas durante su vigencia.

**Segundo:** Que las reflexiones anteriores conducen a acoger, además, la acción de cobro de las referidas cotizaciones.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en las disposiciones citadas, **se declara** que:

**I.- Se mantienen las decisiones contenidas en los numerales I a VI de la parte resolutive del fallo de la instancia.**

**II.- Se condena** al servicio demandado, además, a enterar las cotizaciones previsionales y de seguridad social por todo el período trabajado por la demandante, entre el 1 de febrero de 2017 al 31 de mayo de 2019.

**III.- Se rechaza** la demanda de nulidad del despido.

**IV.- No se condena** en costas al demandado, por cuanto no fue totalmente vencido y por tener motivo plausible para litigar.

Ejecutoriada que se encuentre la sentencia, cúmplase con lo que dispone dentro de quinto día. Pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional correspondiente.

La ministra señora Chevesich fue de opinión de acoger, además, la demanda de nulidad del despido, atendido los argumentos expuestos en la prevención desarrollada en el fallo de unificación.

Regístrese y devuélvase.

N°44.041-2020.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H. y Ministro Suplente señor Roberto Contreras O. No firma el



ministro suplente señor Contreras, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, dieciocho de abril de dos mil veintidós.

RICARDO LUIS HERNÁN BLANCO  
HERRERA  
MINISTRO  
Fecha: 18/04/2022 15:49:16

GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ  
MINISTRA  
Fecha: 18/04/2022 15:49:17

ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ  
SANCHEZ  
MINISTRA  
Fecha: 18/04/2022 15:49:17

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE  
MINISTRA  
Fecha: 18/04/2022 15:49:18



En Santiago, a dieciocho de abril de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

